

SOBRE LA INCAPACIDAD LEGAL DE LAS MUJERES PARA EJERCER OFICIOS PÚBLICOS. LAS REGIDURÍAS DE BADAJOZ: 1648-1700

FELIPE LORENZANA DE LA PUENTE

La reglamentación legal castellana designa tradicionalmente a la mujer como *incapaz* para ejercer oficios públicos¹, pero no para poseerlos. Además, a diferencia de otros *incapaces* (menores, disminuídos...), la mujer podía disponer del oficio a su antojo como posesión privada, en la línea de la progresiva patrimonialización y venalidad de estos bienes públicos en el Antiguo Régimen, y legalmente le estaba reconocida su capacidad para heredarlos, ser objeto de renuncia, y a la vez traspasarlos o vincularlos².

Las mujeres tuvieron gran parte de culpa en el hecho de que durante 1648 y 1700 se presentasen en el Ayuntamiento de Badajoz la nada despreciable cifra de 200 nuevos títulos de regidores, lo que suponía una renovación anual del consistorio, partiendo de unos 40 regidores como media, del 10%³. Lo cierto es que ellas controlaban cerca de la mitad de estos traspasos y esto significaba 3 cosas: habían de ceder el oficio en persona hábil para ejercerlo (traspasos por *incapacidad*), el titular lo ejercía interinamente al no poseer la propiedad, y un cambio de estado en la mujer y su entorno –casamiento, mayoría de edad de sus hijos, casamiento de una hija– conllevaba frecuentemente un cambio de la titularidad en favor del marido, el hijo o el yerno. Ello explica en parte esa prolijidad de títulos de regidores. La otra parte de la culpa la tenían los hombres, que sólo ejercían el oficio

¹ SANTAYANA BUSTILLO, L.: *Gobierno político de los pueblos de España. (1742)*: "El sexo excluye a la mujer el poder obtener empleo de república, no tanto por la falta de juicio como porque no es decente al decoro del sexo mezclarse en los oficios que son propios del hombre". Madrid, 1979: 10. No creemos que existiese, sin embargo, prohibición expresa, sino más bien presupuesta exclusión: "porque los oficios públicos... conviene que se den y provean a personas hábiles, varones prudentes". *Novísima Recopilación*, Lib. VII, Tít. VIII. Ley III.

² *Ibidem*, entre otras, Lib. VII, Tít. VI, Ley XI, confirmando disposiciones anteriores. Superando los 25 años, la mujer propietaria de un oficio podía nombrar persona que lo sirviese ínterin tomaba estado, y, aunque esto se deduce más de la práctica que de la ley, cambiar la titularidad cuando le apeteciese.

³ El presente estudio se basa en los 192 títulos de regidores insertados en los Libros de Acuerdos municipales, hoy en el Archivo Municipal de Badajoz (A.M.B.) durante aquellas fechas, aunque conviene señalar 2 lagunas informativas: los libros de 1654-6 y 1689-90.

por sí mismos en el 53,5% de los casos, cediéndolo en el resto.

¿En qué se basaba la propiedad de las regidurías por las mujeres? Normalmente, aunque en esto la información no es tan completa como desearíamos, lo recibían como herencia de familiares siendo ella la destinataria universal, como mejora si había otros herederos, como bienes de partija, como dote matrimonial, o simplemente las compraban.

Vayamos ahora con las estadísticas. El 51,6% de los oficios traspasados correspondía en cuanto a su propiedad a hombres, el 45,3% a mujeres y el 3,1% restante a instituciones (hospitales) o propietarios desconocidos. Señalemos que del porcentaje atribuido a las mujeres conviene descontar un 9,4% de oficios de posesión conjunta: la propiedad es de la mujer pero la titularidad y la capacidad para ejercer renunciaciones y traspasos del oficio corresponde al marido; para futuros análisis tendremos en cuenta esta separación⁴. Por lo que toca a la modalidad de traspaso, existen diferencias notables. Los hombres recurrieron a la renuncia (dejación contractual del oficio en otra persona) en el 24,2% de las ocasiones, al traspaso por heredad en el 7,8% y al nombramiento (de teniente, cuando el oficio lleva aparejada esta preeminencia) en el 29,3%; además, la incapacidad como motivo del traspaso (siendo menores o clérigos los propietarios) ocurre en 10,1% de los casos, la venta judicial del oficio (por deudas, generalmente) en el 11,1%, las compraventas, arriendos y empeños declarados en el 9,1% y sólo tenemos un oficio acrecentado (1%). Las mujeres, por su parte, traspasaron el oficio en base a su incapacidad en la casi totalidad de los casos anotados (97,1%), y sólo se produjeron dos cesiones por arriendo en base a empeños declarados (2,9%). Los de propiedad conjunta delatan renuncia en un 33,3% y nombramiento en el 66,6%.

Estas cifras denuncian una característica esencial en la calidad de los oficios de regidores del ayuntamiento pacense: la interinidad. Las cesiones temporales de oficios constituyen el 73,4% del total, siendo las mujeres el elemento diferenciador (ya que las incapacidades son siempre provisionales, así como las renunciaciones y nombramientos de tenientes en oficios de propiedad conjunta) respecto a los hombres, que recibieron el oficio a perpetuidad (es decir, para toda su vida y con capacidad de disponer de él para después) en el 51,5% de las ocasiones.

La vinculación a mayorazgo de la regiduría constituía una garantía evidente para su perpetuación, ya que sólo la venta judicial podía despojar al propietario de la misma, y aún así con ciertas condiciones. No es casualidad, así, que las mujeres, en desventaja con los hombres al no poder participar directamente en la política municipal, cubriesen parte de ese factor de riesgo por medio de la vinculación del oficio de regidor: el 63,8% de éstos se hallaba vinculado, frente al 41,1% de los masculinos, el 38,9% de los conjuntos y el 66,7% de los de instituciones.

Este riesgo aumentaba en relación al valor del oficio. Un cargo preeminente (con concesiones suplementarias como el poder servirlo por teniente, entrar con armas en el pleno, asiento fijo, etc.)

⁴ Separación básica porque en estos casos los traspasos no son ya por *incapacidad* sino por renuncia o nombramiento de teniente, ambos provisionales y en manos de quien ejerce el oficio, no del propietario. No obstante, la mujer podía cesar al marido y, en cualquier caso, a la muerte de éste recuperaba la plena propiedad.

ofrece un mayor poder político y rentabiliza su traspaso. En este sentido, las mujeres poseían el atractivo de que el 32% de sus oficios fuesen preeminentes, lo que les reportaron unas ganancias medias –aunque en esto la información es escasa– al arrendarlos de 4.855 reales y al venderlos o serles enajenados judicialmente de 29.333 reales. Los hombres, con un 29% de oficios preeminentes, podían conseguir unos 2.450 ó 19.443 reales respectivamente.

Esto nos lleva a considerar otros dos aspectos básicos del ayuntamiento pacense. En primer lugar, los términos legales de un traspaso de regiduría encierran sin duda –y existen muchos testimonios en forma de declaración o de denuncia de ello– una transacción económica, a pesar de las prohibiciones al respecto⁵, y las mujeres hubieron de ejercer un papel clave cuando por fuerza, a diferencia de los hombres, habían de ceder su oficio. En segundo lugar, el hecho de que buena parte del regimiento ejerciese títulos de otras personas fue uno de los debates polémicos estrella en el ayuntamiento, en que también tenían mucho de decir las propietarias. Polémica porque se ponía en cuestión, por el continuo trasiego de regidores, la propia concepción social y estabilidad política del regimiento. En 1679 un regidor se quejaba de que "en esta ciudad ay más de quarenta oficios de regidores y muchos dellos son de viúdas y menores que, no pudiéndolos servir, los dan a personas de los más caudalosos en ella, y otro porque qualquiera que se alla con mediano caudal o maña tiene ynteligencia para entrar en un oficio de regidor"⁶.

Pero, ¿desempeñaban las mujeres un papel pasivo en este proceso, sujeto a determinadas *mañas* de candidatos masculinos al regimiento? Sin duda, existieron fenómenos de extorsiones económicas que los regidores se aventuraron a insinuar para no dar la posesión al nuevo compañero, como también *matrimonios de interés* de hombres con mujeres en posesión previa de una regiduría (al menos 10 casos) que luego le renunciarían, y regidores especializados en servir títulos de mujeres⁷, abusos de confianza graves⁸ y buena cantidad de niñas–propietarias hechas mon-

⁵ Nov. Rec. Lib. VII, Tít. VI, Ley IV; Tít. IV, Ley VIII.

⁶ A.M.B. Libro de Acuerdos de 1679, sesión del 3-X. ff. 113-115. Badajoz hubo de ser una ciudad singular en este sentido. En Plasencia no se llegaba al 20% de oficios en manos de mujeres LORENZANA DE LA PUENTE, F.: "Plasencia: 1645-1678. El Concejo y los poderes", en *Arqueología do Estado, I*. Lisboa, 1988: 133-154. En Madrid, el 50% de las operaciones de compraventa de oficios entre 1656 y 1799 tenía que ver con mujeres, y el 21% de los arriendos entre 1712-1791; aunque el autor no señala cuántos oficios estaban realmente en su propiedad, también sospecha que los traspasos encubrían arrendamientos HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: "Reproducción y renovación de una oligarquía urbana: los regidores de Madrid en el siglo XVIII", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, LVI. 1980: 637-681. La bibliografía, cada vez mayor, de temas municipales, ha olvidado estos aspectos.

⁷ Pedro del Álamo (1650 y 1657), Melchor Fernández de Morales (1651 u 1664), Pedro de Peredo (1660 y 1661), Ldo. Juan de Herrera (1651 y 1664), Francisco de Chaves Sotomayor (1673 y 1676) y D. Josep Barrera (1679 y 1696) sirvieron dos oficios de regidores distintos ambos de mujeres. Y D. Pedro de Ardila (1657, 1670 y 1674), D. Alonso Hernández (1666, 1671 y 1682), D. Diego de Moscoso (1667, 1691 y 1695) y Juan de Alba (1673, 1682 y 1688) sirvieron 3. Francisco Lobo (1683, 1685 y 1688) cesó en todos los casos por el matrimonio de la dueña con otro hombre; consiguió finalmente un oficio propio en 1693.

⁸ En 1679, Juan Chapín recibió en herencia una regiduría de su tía María de Vega a cambio de la promesa de 40 misas rezadas al año por su alma; en 1682 Chapín vendió el oficio a Gabriel Vázquez por

jas que renuncian sus derechos en familiares. Pero en general podemos decir que la mujer mayor de edad no sólo participó activamente en las compraventas y alquileres de oficios al margen o no de la legalidad (en 8 ocasiones se declara a posteriori un pacto monetario; en muchas más se denuncia *avérselo dado por alto interés*), sino que defendió sus derechos de herencia y matrimonio en pleitos, consiguió alguna vez la venta del oficio de su esposo para recuperar la dote o del suyo propio para pagar su divorcio⁹, impuso condiciones a los receptores de su oficio¹⁰, y, lo que es más importante, adoptó una posición de fortaleza en la defensa de lo que consideraba su propiedad, distinguiendo a ésta claramente de la titularidad del oficio. Es así como el mismo alférez mayor, primer voto, declaraba estar "hallándome sólo en este ejercicio como usufructuario del dicho mayorazgo, y no señor absoluto del dicho oficio de su mujer"¹¹; por su parte, Leonor de Silva efectuaba los nombramientos quedando clara su facultad de *remover* a los designados¹², al tiempo que otras reconocen *revocar* o *cesar* a los anteriormente nombrados. En 1659, D^a Ana Pretel puso las cosas en su sitio cuando denunció a su nombrado tras recordarle su condición de "no usarle por más tiempo que fuere mi voluntad, y que renunciaría en la persona que yo dispusiera, cada vez que yo quisiere, y por justas causas que a ello me mueben... mi voluntad es de que no se le dé la posesión a dicho Luis Albites, y así lo pido y requiero"¹³.

Por último, ¿quiénes eran esos hombres a merced del designio de las mujeres?. Debemos señalar que, si bien la acumulación de oficios en una misma persona no era muy frecuente, si lo era el paso por distintas regidurías de un solo individuo, en busca de una posición prelativa en el consistorio. Hemos contabilizado a 37 regidores que efectuaron ese sistema, acumulando un total de 85 títulos. De ellos, el 51,4% estaba en manos de mujeres, el 28,6% en las de hombres y 11,4% en propiedad conjunta (más el 8,6% en hospitales y desconocidos). Con otras cifras, del total de trasposos efectuados por mujeres, el 29% recae en personas que cuentan ya o contaron con un título de regidor; ese porcentaje se eleva al 39% en los nombramientos conjuntos y desciende al 19% en el caso de los hombres (hemos descontado los oficios que sirven por sí mismos). No existe diferencia

19.000 reales más la promesa de las misas. Por otra parte, en 1691 D. Diego Moscoso, tutor de dos hijas menores de D. Diego Suárez, se nombró a sí mismo regidor; en 1695 consigue la propiedad del oficio tras hacerse monjas las menores, y meses más tarde se lo cambia a D. Guillermo de Tovar por una tenencia de regidor preeminente que tenía problemas para ejercer.

⁹ Dos ejemplos: D^a Ana Pretel en 1664 (divorcio), D^a Leonor Golfín en 1693 y D^a María de Cepeda en 1699 (dote). A.M.B. Libros de Acuerdos, sesiones del 31-X, 7-XII y 20-IX respectivamente.

¹⁰ Ib. En 1659, condición de D^a Constanza Grajera al heredero de pasar anualmente 100 ducados a su hijo (sesión del 4-VIII). En 1670, D^a Mayor de Vargas, religiosa, se reserva en sí el derecho del voto en Cortes que tiene su oficio para una futura y posible rentabilización (sesión del 26-II). En 1680, D^a Juana de Herrera fija el orden de sucesión en el oficio tras dejárselo en testamento a un sobrino (sesión del 5-II), y el ya comentado caso de las 40 misas de María de Vega en 16-I-1679.

¹¹ Ib. 24-XII-1665, ff. 85-86v.

¹² Ib. 21-VIII-1659, f. 49.

¹³ Ib. 10-VIII-59, f. 47.

notable, por otra parte, en el tiempo de duración en el cargo: los regidores de las mujeres ejercían durante un término medio de 7 años y 4 meses, 2 meses más que los de los hombres (los propietarios mantenían el oficio como propio durante 16 años y 2 meses de media).

Por tanto, las propietarias muestran una actitud más conservadora que los propietarios a la hora de designar a sus regidores, siendo más predispuestas que éstos hacia personas con experiencia previa en el regimiento. Igual sucede con la relación familiar: sólo el 7,1% de los nombramientos efectuados por hombres recayeron, aparte de en sí mismos, en personas de su entorno familiar, frente al 35% de los de las mujeres (aunque éstas disponían de un familiar dispuesto a servir que los hombres no tenían: el cónyuge). Pero existe una diferencia fundamental en orden a la extracción socioeconómica y profesional de los designados por unos y otras. Todos éstos resultaron contradichos en bastantes ocasiones al ser presentados al pleno municipal (22,2% de títulos en poder de hombres; 24,6% de mujeres y 27,8% de conjuntos), pero por motivos distintos: los títulos de los propietarios encontraron oposición sobre todo en las cláusulas de nombramiento de tenientes (no poseer título real, preeminencia dudosa, polémica con el asiento a ocupar...) y en supuestas prácticas arrendatarias e interés de los designados por eximirse de cargas concejiles (alojar militares, administrar rentas...). Pero los títulos de las propietarias fueron contradichos por hechos más graves: inhabilidad (ser pobre, analfabeto, de escasa nobleza para oficio preeminente, del estado llano, labrador) e incompatibilidad (no ser vecino, o tener oficio incompatible con el de regidor: escribano, procurador, etc.). Las mujeres, quizá por desconocimiento de la práctica legal o por insuficientes *relaciones sociales*, lo cierto es que mostraron menos escrúpulos que los hombres no sólo en atentar contra la legalidad con nombramientos de *incompatibles*, sino también en atentar contra unos intereses de clase defendidos por el regimiento con nombramiento de *inhábiles* o *incapaces*. Notorios son los casos de D^a Leonor de Mendoza, que casa con un escribano y le cede el oficio de alcalde mayor preeminente; de D^a Marina de Palacios haciendo lo propio con un bastardo y después dejando el oficio a un escribano acusado de estafa; de D^a Inés Freyre con un analfabeto y del común; de D^a Mayor de Vargas con un confitero; de María Escobedo con un escribano pobre (son todas definiciones literales), y sobre todo de la marquesa de la Lapilla, quien, contra viento y marea (*se conoze el capricho y fin particular que en esto a tenido uno y otro*), se resiste a revocar el nombramiento hecho en un señor *ocupado en el oficio servil del campo* para servir un oficio muy preeminente para el que se precisaba "mayor graduación y esperiencias y además no puede convenir a la ciudad ni parezer vien que la presida quien ayer vino del campo de Talavera"¹⁴.

Unas notas para la reflexión. El oficio de regidor era una fuente de poder político, social y económico que las propietarias, aún a falta de investigar el primer aspecto, supieron utilizar a través de todos esos resortes ya vistos, los cuales, ni deben ser propios de Badajoz ni se desvinculan de un proceso ahora en su culminación que "les convertía en cosas, en bienes objetos de propiedad privada"¹⁵. Claro que las mujeres –aún salvando las diferencias que conocemos– tenían a quien

¹⁴ Ib. 17-II-1695, ff. 12v-13.

parecerse en sus actuaciones, a los hombres, con quienes además compartían –no podía ser de otro modo– la pertenencia a esa élite tan privada, no necesariamente hidalga, única capaz por su condición de administrar lo público.

¹⁵ TOMÁS Y VALIENTE, F.: "La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (Siglos XVII y XVIII)", en *Historia, Instituciones y Documentos*, 2: 525-547 y 530.